

Tres conductores muertos y varios heridos en los últimos días:

Transportistas paralizan Lima en protesta por extorsiones y gobierno decreta emergencia

La medida fue tomada ante la ola de violencia que afecta a Perú y que ha sido generada por bandas criminales y sicarios.

EVA LUNA GATICA y JUAN PABLO PALACIOS

A causa de las extorsiones y violencia contra su personal, decenas de empresas de transporte público en Perú llevaron a cabo un paro total de sus operaciones ayer que afectó a miles de pasajeros en las provincias de Lima y Callao, y que desencadenó la declaración de un estado de emergencia durante 60 días por parte de las autoridades para hacer frente a la crisis de seguridad que afecta al país.

Los transportistas exigían al gobierno de la Presidenta Dina Boluarte medidas urgentes para frenar el actuar principalmente de bandas de sicarios, que desde finales de agosto han protagonizado 15 atentados contra 11 empresas de transporte público, los cuales dejaron a tres conductores asesinados y varios heridos, entre ellos, pasajeros, según la prensa peruana.

"Actualmente vivimos el peor escenario de inseguridad luego del Conflicto Armado Interno (1980-2000)", señala a "El Mercurio" Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología en Perú y exviceministro de Seguridad Pública. "(...) Esto se ha extendido gravemente, afectando a muchos negocios locales y familiares. Hoy las víctimas de extorsión son principalmente los pequeños y medianos emprendedores", acota.

En ese marco, el gobierno declaró en estado de emergencia a once distritos de Lima y uno en su vecina provincia de Callao, según informó el ministro de Defensa, Walter Astudillo, que ayer dijo que corresponderá a la Policía Nacional de Perú (PNP), en colaboración con las Fuerzas Armadas, mantener el control en esas zonas. Agregó que el Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica como "delito de terrorismo urbano" el sicariato, secues-



LOS TRANSPORTISTAS se manifestaron en Lima exigiendo mayor seguridad.

tro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal, un pedido que habían hecho los transportistas.

Las manifestaciones paralizan Lima

Los usuarios en Lima se agolparon desde temprano en las paradas y estaciones del transporte público, luego de que al menos 3.000 vehículos dejaron de prestar sus servicios como forma de protesta, según estimaciones de los propios transportistas, lo que llevó a la suspensión de clases en colegios y universidades. Grupos de manifestantes tiraron piedras a autobuses que no se sumaron al paro.

La convocatoria tenía como

punto final una concentración a las afueras del Congreso, que se encontraba protegido por un gran cordón policial, donde se reunieron centenares de transportistas con ataudes de cartón y cartelitos con consignas que decían "basta de muertes a los transportistas" y "no más sangre, no más extorsión".

"Vivimos en medio del miedo (...) Los extorsionadores se llevan hasta el 30% de las ganancias, hemos sufrido 14 atentados con disparos que ponen en peligro no solo a los choferes, sino a los pasajeros" dijo a The Associated Press Martín Valeriano, dirigente de un gremio que agrupa a más de 16.000 buses. "Ya no damos más, los compañeros transportistas están muriendo. De repente, la cri-

minalidad está llegando a esos niveles porque alguien no está haciendo su trabajo", criticó, por su parte, Waldo Poma, secretario de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), en una reunión con representantes del Congreso.

La protesta también contó con el paro de comerciantes, emprendedores y mototaxistas.

"Ahora hay que prestar atención a que otros sectores empiecen a reclamar. Ya no son los dirigentes políticos o sindicales, sino los emprendedores, empresarios, incluso los informales los que reclaman. Y esto puede ser un punto de quiebre, ya que este sector es la base socioeconómica del país", comenta Zevallos. "La lectura de los ciudadanos es que este gobierno

En Honduras y Guatemala también denuncian chantajes

Las extorsiones a conductores también han sido denunciadas en Guatemala y Honduras, donde más de 5.000 choferes han sido asesinados entre 2010 y 2024.

A finales de agosto pasado, un conductor de un bus extraurbano fue sorprendido por sicarios y asesinado a tiros cuando llevaba 10 kilómetros de haber salido de la Ciudad de Guatemala. Esta escena se repite en las carreteras de ambos países, donde los choferes se sienten a la deriva sin apoyo de las autoridades o incluso de sus superiores, quienes en muchos casos se niegan a pagar la extorsión pedida por las pandillas, consigna EFE.

Estas organizaciones criminales han obligado a muchas empresas de transporte a cerrar temporalmente, o a que los trabajadores suspendan sus funciones.

no ha tomado las medidas correctivas adecuadas para responder a la inseguridad", finaliza.

Aumento de la inseguridad

Según datos del "Barómetro de Seguridad", apoyado en información de la encuestadora Ipsos, el 81% de los ciudadanos en la región de Lima se siente inseguro al salir a las calles, mientras que el 76% manifestó sentirse inseguro a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) publicó en mayo datos que muestran que el 27,7% de los peruanos urbanos reportaron ser víctimas de violencia en los últimos meses, muy por sobre el 22,6% que reportó experiencias similares en 2022. A su vez, el gobierno admitió a inicios de septiembre que las extorsiones se quintuplicaron entre 2021 y 2023. En 2021 las denuncias policiales por extorsión sumaron 4.500 casos, mientras en 2022 llegaron a 15.974 y en 2023 alcanzaron los 22.294. En lo que va de 2024, las denuncias por extorsiones suman 14.220.

"El aumento de la delincuencia es evidente no solo en números sino en modalidades, es decir, el si-

cariato ha crecido, y la extorsión, que casi no existía, prácticamente se ha generalizado", dice a este diario José Luis Pérez, experto en seguridad ciudadana de la Universidad del Pacífico en Perú y ministro del interior entre 2015 y 2016, que achaca este aumento la criminalidad a la introducción del modelo del crimen del Tren de Aragua, una megabanda criminal venezolana que expandió sus actividades en América Latina.

En las calles de Lima coinciden con esa mirada. José Carlos Pedrero, 40 años, cree que el origen de los problemas está en el masivo arribo de inmigrantes en los últimos años. "Aquí está brava la cosa, la delincuencia no para, a todos nos pega. Esto viene con la llegada de los extranjeros", dice.

Joel, un conductor de un vehículo de plataformas que prefiere no dar su apellido, tiene una mirada distinta: "Este tipo de delincuencia (extorsiones) viene desde hace un tiempo, pero no en la cantidad, en la magnitud que hay ahora. La gente culpa al extranjero, dice que esto pasa desde que vinieron los venezolanos. También los culpan del aumento de la prostitución, pero eso no es así. Acá siempre hubo prostitución, delincuencia, narcotráfico. Sí, ahora, se ve más esto".